

Tomás Amadeo Vasconi
Venezuela: un análisis de coyuntura

PRELIMINAR

Entre 1974 Y 1978 Venezuela vivió un periodo de singular euforia¹ Los ingresos del Estado venezolano, como consecuencia del gran aumento de los precios del petróleo en el mercado internacional, pasaron de 19 960 millones de bolívares en 1973 a 42 883 millones de bolívares (unos 10 000 millones de dólares) en 1974; es decir, un incremento de 125%. Este impresionante aumento no sólo fortaleció aún más la presencia del Aparato Estatal en la economía nacional sino que se constituyó en la base material de un proyecto de transformación de la línea tradicional que venía observándose en el proceso de acumulación capitalista nacional y, más allá de esto, de un intento de reubicación de Venezuela en el contexto económico y político internacional. Desarrollo de grandes industrias básicas de exportación –acero, aluminio, petroquímica, industria naval–, liderazgo "tercermundista" e intento de expansión subimperialista hacia el área del Caribe e incluso hacia América del Sur, fueron elementos fundamentales de ese nuevo proyecto. Éste, si bien favorecía prioritariamente los intereses del gran capital monopolista asociado, en un principio posibilitó –gracias a la gran disponibilidad financiera estatal– la satisfacción parcial de los intereses de otras fracciones burguesas y aun de las clases asalariadas, a las que se concedió en 1974 un sustancial aumento.

Hacia mediados de 1977, sin embargo, el modelo comienza a mostrar limitaciones: el exceso de circulante, si bien maneja una próspera actividad comercial, también es fuente de una especulación desbordada y comienza a empujar hacia arriba los índices inflacionarios. La deuda pública comienza a crecer a ritmo cada vez mayor y los precios del petróleo, aunque continúan aumentando, lo hacen ahora a ritmo más moderado, con lo que los ingresos comienzan a resultar escasos para la magnitud de los compromisos contraídos. Se intentan entonces implementar algunas medidas –control del circulante y los créditos, etcétera–, cuyo efecto en el plano social y político es provocar el enfrentamiento entre el

¹ Para un análisis de este periodo véase nuestro trabajo *Estado y capitalismo en la Venezuela contemporánea*. Facultad de Humanidades y Educación de la UCV, Caracas, 1979.

gobierno y algunas importantes fracciones burguesas, particularmente la de la construcción que en Venezuela tiene singular importancia. Otros dos elementos van a jugar importante papel no sólo en el deterioro de la imagen del gobierno sino de la situación social y política en general. Por un lado, el deterioro global de todos los servicios: agua, transporte, comunicaciones, etcétera. Por otro, una corrupción que, si por un lado puede considerarse una constante de los gobiernos locales,² por otro –y también como consecuencia del incremento de los ingresos públicos– alcanza magnitudes astronómicas.

Todos estos elementos unidos a una hábil campaña de fuerte tono populista del principal partido de oposición, COPEI, de tendencia socialcristiana, llevan al triunfo de este último en las elecciones generales de diciembre de 1978.

El nuevo gobierno asume así el poder con un fuerte apoyo popular, particularmente de las capas más desposeídas y de las fracciones burguesas y pequeñoburguesas menos favorecidas por la política económica del gobierno anterior. Algunos pensaron en un renacimiento del "populismo"; las condiciones objetivas, sin embargo, no se prestaban para ello. Veamos algunas características de la nueva política.

1. SOBRE EL NUEVO GOBIERNO Y ALGUNAS DIMENSIONES DE SU POLÍTICA ECONÓMICA

Desde que se iniciara el nuevo gobierno, a principios de marzo del presente año, se esperaron definiciones inmediatas y explícitas acerca de los principales problemas que encaraba la economía venezolana en la coyuntura; el gobierno, sin embargo –aun incluyendo el discurso de toma de posesión del nuevo presidente–, se limitó a señalar aspectos generales de la situación, caracterizándola como una economía "hipotecada" sin indicar, no obstante, el tipo de medidas concretas que se tomarían para encarar esa situación. Al pasar de los días, no aparecían claramente tales medidas, mientras el nuevo mandatario repetía sus vagas proposiciones y promesas populistas, dando audiencia a representantes de sectores y barrios populares de la ciudad. Este hecho creó una confusión generalizada y logró hacer popular la frase, profusamente utilizada por Acción Democrática y que corrió desde parlamentarios hasta humoristas, "el gobierno no arranca".

² Véase al respecto, A. Martín, *Los peces gordos*. Vadell Hnos., Valencia, 1977.

Pronto, sin embargo –al menos para los analistas más lúcidos–, se vio que el gobierno *sí había "arrancado"*; detrás de esa inercia, de ese *110 hacer* –y detrás del velo del "populismo" –estaban ocurriendo en la economía hechos muy importantes. No hacer, no intervenir, *puede ser también una política económica*; cuando se paralizan los créditos, cuando se disminuye el circulante, cuando se aumentan los precios (cosas que estaban ocurriendo en el país), aunque no se lo haya anunciado, aunque no se hayan dictado explícitos decretos, *existe en la práctica una política económica*, particularmente en el caso venezolano, en que la participación del Estado es crucial. Poco a poco, declaraciones sucesivas del ministro de Hacienda, hombre clave del nuevo gobierno y luego paulatinamente de otros –declaraciones además siempre parciales, siempre referidas a uno o dos aspectos concretos, lo que dificultaba la percepción de la totalidad– permitieron atar cabos y reconstruir la malla.

La preocupación que aparecía como central en esas declaraciones era el "recalentamiento" de la economía –expresión que por otra parte ya había comenzado a utilizarse en los dos últimos años de la administración anterior–; el "no hacer" aparecía como un primer paso para procurar su "enfriamiento". Ya a esas alturas –octubre de 1979– de las declaraciones presidenciales, ministeriales, de las opiniones de las organizaciones empresariales y obreras, así como de opiniones profesionales y periodísticas, era posible formarse un cuadro relativamente coherente de la nueva política económica y de sus probables consecuencias inmediatas futuras.

Aquí sólo retendremos los aspectos que consideramos centrales.

Comenzaremos por su dimensión monetaria, puesto que en la acción gubernamental ésta aparece como el mecanismo central de la nueva política económica. En esta dimensión encontramos como elementos principales: 1] el control –la disminución– del circulante, cuya expansión fuera incesante en el periodo anterior; 2] la restricción y reorientación del crédito; 3] el control del proceso inflacionario que venía acentuándose en los últimos años.³ Estas medidas monetarias tienen como complemento

³ Éstos, así como otros aspectos que mencionaremos a continuación, constituyen aspectos básicos del "neoliberalismo" propuesto por Milton Friedman y sus discípulos de la Escuela de Chicago (los llamados "Chicago Boys"); ya alguien ha mencionado el hecho señalando al ministro de Hacienda como un "Chicago Boy". Esto ha sido desmentido repetidamente; sin embargo, contemplada en su dimensión estratégica esta nueva política económica no difiere sustancialmente de la aplicada por los gobiernos militares del Cono Sur. Para una crítica de ese tipo de política véase la "Carta abierta aniversario

otras destinadas a la liberalización de los mercados: 1] liberación progresiva de precios internos y 2] disminución de aranceles a la importación. La intervención del Estado también ha de variar en su carácter; entre sus cambios se observa: 1] una mayor racionalización de su gestión (esto se propuso en la gestión anterior pero nunca se aplicó de manera consecuente); 2] la disminución del gasto público, restringiéndolo sólo a sus aspectos fundamentales⁴ y, por último, 3] en lo que respecta a la política salarial, un no rotundo a los aumentos masivos (como se otorgaron en 1974 con Carlos Andrés Pérez); los aumentos que se concedan surgirán de negociaciones y deberán estar relacionados con los incrementos de la productividad.

No es difícil inferir de todo este conjunto de disposiciones que se trata de introducir una mayor racionalidad capitalista y que para lograrlo se confía en el "libre juego de las fuerzas del mercado", en la competencia tanto entre distintos sectores y unidades de producción dentro de la economía cuanto entre éstas y las que operan externamente. Es decir, que "la racionalidad capitalista" opere con la menor incidencia de interferencias "políticas".

Estas medidas han de tener, necesariamente, consecuencias inmediatas e importantes tanto sobre el proceso de producción cuanto sobre la circulación de mercancías. En primer lugar, sólo aquellas empresas que posean una capacidad relativamente grande de autofinanciamiento pueden sobrevivir durante un cierto periodo a situaciones como las que creará esta nueva política económica, del mismo modo que sólo aquellas empresas que hayan alcanzado un grado elevado de eficiencia y productividad podrán seguir desarrollándose en un mercado en que se aflojan los tradicionales mecanismos de protección; y sabemos que en nuestros países sólo las grandes empresas vinculadas al capital imperialista presentan en general esas condiciones. Otro tanto ocurrirá en el orden de la circulación, pues sólo los grandes emporios comerciales, las cadenas de tiendas o supermercados, son capaces de resistir en una época de disminución de los ingresos reales y los créditos y, por consiguiente, de retracción de las ventas.

a Arnold Harberger" de Andre Gunder Frank, publicada en Venezuela bajo el título de "Radiografía económica del fascismo chileno" en *Trimestre Ideológico*, n. 16, octubre-diciembre de 1974; también nuestro trabajo *Gran capital y militarización en América Latina*. Ed. Era, México, 1978.

4 Puede pensarse también -aunque no ha sido declarado oficialmente que se dará un proceso de privatización de buena parte de las empresas públicas; esto resulta totalmente coherente con la política propuesta, en la medida en que contribuye tanto a la racionalización cuanto al "abaratamiento" del Estado.

La prolongación de la aplicación de medidas de esta naturaleza provocará necesariamente una verdadera "purga" del capitalismo dependiente venezolano, que por lo demás ha tenido hasta hoy un desarrollo en gran parte "artificial" (y el mismo presidente lo ha dicho en algunas de sus declaraciones), en el sentido de que para ese desarrollo ha dependido más de la intervención estatal que del propio "juego económico". Esta "purga" resulta, por otra parte, perfectamente racional desde el punto de vista de lograr un mejor ordenamiento capitalista de la economía nacional. Pero sus consecuencias económicas –y más aún las sociales– resultan graves. Es difícil que la pequeña y aun la mediana industria, desarrolladas al calor de las políticas proteccionistas y de la generosidad del gasto público, puedan sobrevivir a un régimen "libreempresista" en que se mantenga durante un cierto periodo un régimen de abierta competencia. Es decir, la "racionalización" capitalista de la nueva política económica buscada a través del impulso de la competencia puede provocar aumentos en la productividad y la producción internas e inducir la racionalización del aparato productivo, pero ello se dará a través de la liquidación de un buen número de pequeñas y medianas unidades de producción, como ha ocurrido ya en otras partes con la aplicación de políticas similares y como ha sido reconocido también en declaraciones oficiales. Esto a su vez provocará un aumento en la tasa de cesantía, lo que unido a la disminución del salario real conducirá a una retracción⁵ del mercado interno que afectará aún más a dichas empresas y al pequeño y mediano comercio.

Esta situación de retracción –que ha sido prevista y reconocida por el ministro de Hacienda– se considera como "un mal necesario" pero en todo caso coyuntural; la aplicación de esta política se circunscribiría a los años 1979 y 1980; en 1981, según las previsiones del Ministerio, comenzaría una nueva reactivación económica.

A propósito de todo esto quisiéramos hacer algunos comentarios. En primer lugar sobre los plazos señalados por el ministro; la experiencia histórica nos señala que aun en países en que esta política se ha aplicado más drásticamente de lo que creemos pueda hacerse en Venezuela por razones que enseguida pasamos a explicar –como la política de "shock" aplicada en Chile a un enorme costo social–, sus resultados sólo han podido mostrarse con inicios de reactivación económica después de cinco o seis años. Luego: nos parece muy difícil que en el caso venezolano pueda darse una aplicación radical del modelo neoliberal, al menos mientras subsistan –o se pretenda que subsistan– las actuales

⁵ Señalemos de paso que entre "retracción" y "recesión" la diferencia es más cuantitativa que cualitativa.

condiciones sociopolíticas. Este modelo afecta masivamente a amplios sectores de la población: desde proletarios y asalariados en general hasta sectores de la burguesía; éstos necesariamente harán oír por diversos medios sus voces de protesta –medios que, incluyen al mismo partido de gobierno– y presionarán para que se realicen cambios o se tomen medidas compensatorias hacia los afectados: aumento de salario, créditos, medidas proteccionistas, etcétera, etcétera. Las contradicciones naturales en toda sociedad capitalista tenderán a adquirir un carácter progresivamente más explosivo. Habrá marchas y contramarchas; y, sin embargo, se tratará de continuar con esta política, pues no constituye una mera "respuesta coyuntural"–como se la ha querido presentar–, un momento de detención para tomar aliento y regresar luego a una política de expansión del mercado interno, de redistribución, de "nacionaldesarrollismo-populista". Constituye parte de una estrategia, de una línea tendencial, que necesariamente habrá de continuarse en los próximos años y que tiende a reforzar aún más a los sectores más poderosos del gran capital y dentro de éste a aquéllos más estrechamente vinculados al gran capital transnacional por sus condiciones de financiamiento, su acceso a la tecnología, etcétera. En este sentido, la nueva política económica no hará sino reforzar los efectos de la que venía aplicándose en la administración anterior, radicalizándolos, pues llevará también si no a la eliminación, por lo menos al debilitamiento de algunos sectores burgueses sobreprotegidos hasta la fecha.

Y aquí es donde, creemos, es preciso no engañarse. La política económica ha cambiado, *porque han cambiado las condiciones objetivas* y no porque los intereses de clase a los que habrá de satisfacer sean diferentes. Los intereses de lo que hemos venido llamando la gran burguesía monopólica, u oligarquía financiera, asociada al capital imperialista, seguirán siendo satisfechos de manera prioritaria, ahora de manera más radical por cuanto las condiciones objetivas han estrechado el margen posible de negociación con otras fracciones, clases o capas. Dicho de otra manera: han disminuido y seguirán disminuyendo las bases de un posible consenso. Dentro de este cuadro de progresiva acentuación de los perfiles y las contradicciones de clase habrán de moverse las fuerzas y organizaciones políticas en su escena específica; convendrá seguir atentamente este movimiento, pues de él depende en buena parte la posibilidad de subsistencia del orden institucional actual.

2. LOS PRIMEROS EFECTOS: LA RADICALIZACIÓN DE LAS CONTRADICCIONES, LAS CARACTERÍSTICAS DE LA COYUNTURA Y LAS PERSPECTIVAS CERCANAS

Los efectos de la nueva política gubernamental han sido mucho más inmediatos de lo que en un momento se pensó; la radicalización de las contradicciones está acentuándose a un ritmo que en otras situaciones podría considerarse inusitado. Desde que las líneas principales de la nueva política económica se hicieran explícitas a mediados de año, pudieron ya escucharse manifestaciones críticas provenientes de sectores diversos. Hacia los meses de septiembre y octubre –y muy especialmente en este último– esas manifestaciones se elevan de tono y semiempiezan a expresarse ya en prácticas concretas.

Por el lado de la burguesía vemos que las contradicciones se han internalizado en su máximo organismo corporativo, FEDECAMARAS; dentro del mismo, las fracciones medias y pequeñas de la burguesía –sobre todo parte del sector industrial agrupado en FEDEINDUSTRIA– presionan para que el organismo enfrente a la conducción económica neoliberal; también CONSECOMERCIO manifiesta una creciente preocupación frente a la severa restricción del circulante y la ausencia de créditos.

La pequeña burguesía asalariada comienza a ser fuertemente golpeada por la rápida elevación de precios al consumidor y el estancamiento de sus salarios. Un ejemplo de ello lo constituyen los maestros de primaria que, después de infructuosas negociaciones con el Ministerio respectivo, se han lanzado, a partir del 7 de noviembre, a una huelga por tiempo indeterminado.

En cuanto al movimiento obrero organizado, protagonizó marchas y manifestaciones en la capital y ciudades importantes del país hacia la tercera semana de octubre. En Caracas en particular –aunque también en la ciudad industrial de Valencia– la manifestación de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), a la que asistieron también algunas connotadas figuras políticas de oposición, fue violentamente reprimida por las fuerzas policiales, constituyéndose también en ocasión de disturbios, actos de violencia, incendio de algunos establecimientos bancarios y comerciales, etcétera. Ese mismo día, el presidente del organismo, José Vargas –quien es militante de Acción Democrática y también diputado– denunció en el Congreso el intento policial de asesinarlo y emplazó al gobierno a atender las demandas salariales formuladas, amenazando con declarar una huelga general en todo el país.⁶ La

⁶ La pertenencia de José Vargas a AD y su condición de tradicional burócrata sindical del partido ha permitido a algunos dar de estos hechos una explicación simplista y superficial: "se trata de una acción de la oposición adeca"; si bien esto es cierto, no constituye sin duda toda la verdad, pues si la acción fue posible y las amenazas fundamentadas es porque el movimiento obrero está "movilizable" hoy en Venezuela dadas las condiciones objetivas –económicas, políticas y sociales– por las que transita hoy el país.

respuesta del gobierno fue simplemente afirmar que se trata de un "gobierno fuerte" –expresión del presidente de la República– pues cuenta con el apoyo popular; mientras el ministro del Interior y las autoridades policiales explicaban y justificaban la intervención policial por la "presencia de provocadores y terroristas" en la manifestación de la CTV.

A partir de entonces los disturbios no han cesado en sectores populares de Caracas –a los que se han sumado movimientos de estudiantes de liceo– como el "23 de Enero", Caricuao, etcétera; los enfrentamientos con la policía han cobrado a estas alturas ya varias víctimas, particularmente jóvenes.

Si nos remitimos ahora a la escena política podemos observar un conjunto de aspectos significativos. En primer lugar las acciones del mismo gobierno. Éste aparece fundamentalmente ocupado en lograr el desprestigio del gobierno anterior y en particular del presidente que le precediera, Carlos Andrés Pérez. Las investigaciones sobre corrupción administrativa, negociados, etcétera, se han sucedido unas a otras: la compra de seis fragatas "Lupo" a la empresa italiana Cantieri Navali Riuniti, la adquisición de misiles tipo Ottormat, la del avión presidencial y, por último, el banco refrigerado "Sierra Nevada", han sido ocasión de violentas críticas a la administración anterior. Alguien ha observado atinadamente, sin embargo, que estas críticas pueden afectar más allá del gobierno al que se ataca y sembrar dudas sobre la eficacia de un sistema en que todo eso es posible.⁷ Por otro lado, las contradicciones que hoy se agudizan rápidamente en la sociedad global se han internalizado ya en los dos grandes partidos burgueses, AD y COPEI. Elecciones internas en ambas organizaciones para designar secretario general han sido ocasión para poner en primer plano esas contradicciones. Aun la acción personal de sus jefes tradicionales, Rómulo Betancourt y Rafael Caldera –que en otra oportunidad hubiera sido efectiva– no han bastado para encontrar, como lo pretendieron, una solución "de consenso". Este deterioro de la escena política alcanza también hoy a las organizaciones de izquierda, que aparecen paralizadas frente a los nuevos acontecimientos, con crisis y divisiones internas o ya directamente en proceso de fragmentación, como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Resumiendo. Una coyuntura económica crítica, particularmente por el elevadísimo peso de la deuda pública. Un gobierno que llega con fuerte apoyo popular y de las fracciones de la burguesía media, pone en marcha una política económica que sólo puede favorecer al gran capital monopolista asociado

⁷ Téngase en cuenta además que en todas esas operaciones actuaron también altos jefes de las Fuerzas Armadas.

y al imperialismo y que de hallar consecuente aplicación llevará en corto plazo a la ruina de los sectores más débiles del capital y a una intensa pérdida del valor real de los salarios (política que además lo enfrenta con importantes sectores de su propio partido). Importantes y crecientes contradicciones en el seno del principal organismo corporativo de la burguesía, FEDECAMARAS. Un deterioro intenso de las principales organizaciones políticas burguesas, que puede conducir las rápidamente a una situación de "crisis orgánica". Comienzo de un periodo de agitación y de luchas –que puede pensarse se intensificarán– del movimiento obrero y popular, a las que hay que sumar el descontento de amplias capas de la pequeña burguesía. Y una izquierda sin condiciones para constituirse a corto plazo en una alternativa real. Si sumamos a esto la presencia en los altos mandos de las Fuerzas Armadas de "los nuevos militares" –los de la Contrainsurgencia y la Seguridad Nacional–, no puede llamarnos la atención que la palabra "golpe" circule cada vez más, escrita y oralmente.

Sobre esto último habría que hacer unas breves consideraciones finales.

Si bien no puede –ni debe– descartarse la posibilidad de un golpe militar dadas las condiciones enumeradas en el párrafo anterior, nos parece que es preciso hacer algunas consideraciones complementarias que permitan matizar este análisis. Creemos que en Venezuela aún no se han acabado las condiciones para una negociación. Al parecer, la directiva de la CTV –y Acción Democrática– han percibido la peligrosidad de la situación y han decidido dar momentáneamente al menos un paso atrás. La suspensión de la amenazada huelga general y las conversaciones entre José Vargas y Ciro Añez Fonseca (presidente de FEDECÁMARAS) así parecen indicarlo. Por otra parte existe en el Congreso una ley de aumento general de salarios que oscila entre el 5%, para aquellos que se elevan por encima de los cinco mil bolívares, hasta el 30% para los menores de mil, que ya tienen media aprobación. Esta Ley podría frenar momentáneamente las manifestaciones obreras y populares, pero se constituye obviamente en un elemento contradictorio en relación a la política económica que intenta implementar el gobierno, además de que tendrá como efecto inmediato empujar hacia arriba los precios de los bienes de consumo hoy liberados. De este modo, puede preverse, en lo inmediato, una detención de la marcha hacia la disrupción del orden democrático burgués; en lo mediato, sin embargo, puede preverse también un agravamiento progresivo de las contradicciones y los conflictos sociales.

Noviembre de 1979.